

2022 LATAM
OUTLOOK

2022 LATAM OUTLOOK

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior authorization of BMJ Associated Consultants' Office. Copyright infringement is a crime established by Federal Law nº 9.610/1998 and punished by art. 184 of the Brazilian Penal Code.





Carta de Apertura

Entender la política interna brasileña es un desafío que BMJ siempre ha afrontado con excelencia y profesionalidad. En un mundo cada vez más globalizado y conectado, nos damos cuenta de que la política internacional debe ser abordada con igual importancia. Las acciones de nuestros vecinos y pares internacionales son una preocupación creciente para la dinámica interna brasileña y también para nuestros clientes. La implacable pandemia y el desabastecimiento generalizado en 2021 revelaron que una visión política completa es esencial para una gestión responsable del riesgo.

Por ello, BMJ ha asumido la misión de analizar América Latina en 2022. Nuevos gobiernos y elecciones con resultados inciertos marcarán los actores que determinarán el éxito o el fracaso de mantener el rumbo de la recuperación económica iniciada en 2021. El continente americano es una dinámica combinación de países muy diversos, con un impacto significativo en la política y las empresas con sede en Brasil. Una visión crítica y analítica sobre el futuro de la región es crucial para los directivos y los responsables de la toma de decisiones.

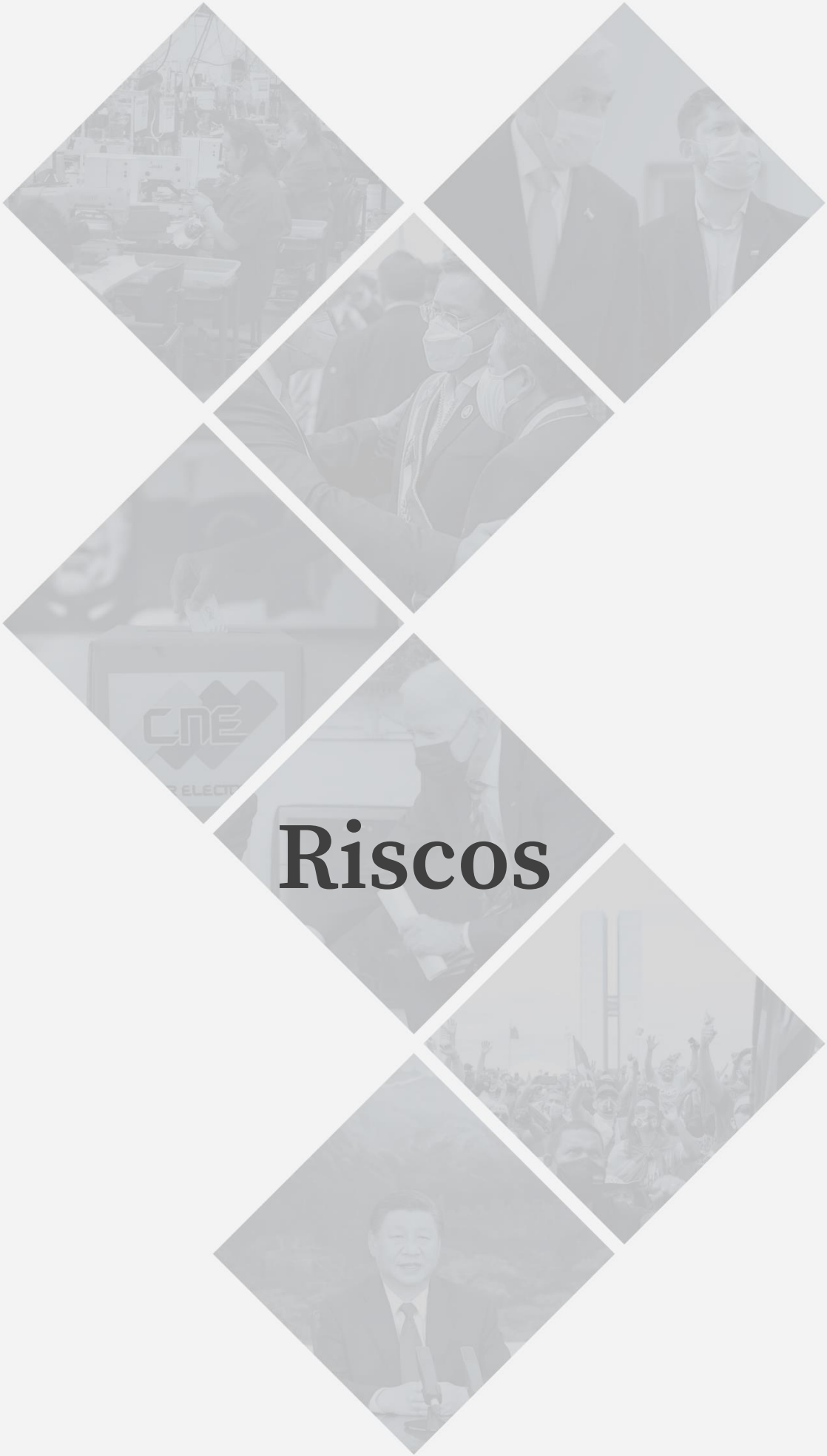
La primera edición de LATAM Outlook ha sido elaborada por expertos de BMJ Associated Consultants, y en ella se exponen las principales tendencias y riesgos para la región en 2022. El documento analiza cuestiones críticas del escenario político y económico con un enfoque en Argentina, Colombia y México, algunas de las economías más fuertes del continente. Esperamos sinceramente que nuestros socios y clientes obtengan una perspectiva más detallada de nuestra región.



Índice

Riscos	8
Estabilidad Política	9
Sanidad.....	10
Sociedad.....	10
Intervención del Estado y Clima Empresarial	11
Regulaciones y Leyes.....	12
Fiscal.....	12
Medioambiente	12
Política Internacional	13
Eventos y Tendencias	14
América Latina.....	15
Elecciones y un Guiño a la Izquierda.....	16
Economía	20
Pandemia	20
Migración	22
Relación con China.....	24
Relación con Estados Unidos	25
Relación con la Unión Europea	26
Multilateralismo.....	27
Brasil.....	29
Agenda Social.....	30
Gobierno y Instituciones Públicas.....	30
Presidencias del STF y el TSE.....	31
Elecciones.....	32
Economía	33
Argentina.....	35
Fondo Monetario Internacional.....	36
Base Governante.....	37
Oposición	38
Intervencionismo Estatal y Clima de Negocios	38
PIB, Inflación y Crecimiento Económico	39
Colombia	40

Elecciones Predisenciales.....	41
Elecciones Parlamentarias	42
Seguridad	43
Nuevo Paro Nacional.....	44
PIB, Inflación y Crecimiento Económico	45
México.....	46
Reforma Energética	47
Revocación de Mandato	48
Proyectos de Infraestructura.....	49
Migración	50
PIB, Inflación y Crecimiento Económico	52



Riscos

Estabilidad Política

Los impactos socioeconómicos de la pandemia probablemente seguirán condicionando la estabilidad política en América Latina. Aunque la mayor parte de la región no tendrá elecciones presidenciales en 2022, excepto Brasil, Colombia y Costa Rica, la estabilidad política seguirá siendo un reto para los países de la región. Por un lado, las últimas elecciones latinoamericanas oficializaron un "voto de protesta" para los gobernantes que buscan la reelección debido al aumento de las desigualdades socioeconómicas agudizadas por la pandemia. El recambio ha provocado un efecto dominó para aquellos que lograron sobrevivir al descontento político; la polarización se ha mantenido entre la población en general y, cada vez más, los gobiernos han encontrado más difícil asegurar la gobernabilidad y el consenso mayoritario con el Poder Legislativo, lo que ha resultado en relaciones más frágiles como en Argentina, Ecuador y Perú. La pandemia también ha agudizado las diferencias entre los Poderes, lo que ha socavado la gobernabilidad en países como Brasil, México, El Salvador y Perú, donde los conflictos entre los otros Poderes son eminentes. Los impactos socioeconómicos de la pandemia también son relevantes para los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil, Colombia y Costa Rica, que pueden poner de manifiesto el descontento popular contra la base gobernante, pero al mismo tiempo, aumentar los riesgos de que candidatos más populistas atraigan al electorado.

Un informe de IPSOS Global Advisor (2021)¹ señala que las principales economías de América Latina - Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú- se encuentran entre los ocho países más populistas del mundo. La polarización política también será un desafío para la estabilidad política en la región. Este último riesgo es probable que se acentúe por el uso masivo de las redes sociales, trayendo consigo otros desafíos como las fake news y el descontento público contra las instituciones y los actores políticos. Otro estudio de LAPOP/Barómetro Americano (2019)² señala que, aunque la mayoría de los usuarios de las redes sociales en América Latina apoyan la democracia en sus respectivos países, este grupo es el que muestra más desconfianza hacia las instituciones políticas y los medios de comunicación tradicionales. Los poderes Legislativo y Judicial son los "menos confiables" para los usuarios con mayor acceso a internet, alcanzando el 26,5% y el 30,4%, respectivamente. Aunque no hay una diferencia significativa, el 33,4% de los latinoamericanos confía en la representación de sus respectivos poderes ejecutivos.

¹ IPSOS Global Advisor. **Broken-System Sentiment in 2021: Populism, Anti-elitism, and Nativism**, 2021.

² LAPOP. **The 2018/19 AmericasBarometer**, Vanderbilt University, 2019.

Sanidad

La nueva variante omicron ha provocado un aumento exponencial de nuevos casos de coronavirus en América Latina. Tras alcanzar los peores índices de pandemia de los últimos años, la región podría estar mejor preparada para afrontar los riesgos de la nueva oleada, sobre todo si se tiene en cuenta que la subregión sudamericana se convirtió a finales del año pasado en líder en vacunación contra el COVID-19, con casi el 65% de toda la población totalmente inmunizada. América del Norte, que incluye a Estados Unidos, México y Canadá, ha alcanzado casi el 60% de la población totalmente vacunada, mientras que el Caribe presenta un 43%. Considerando todo el continente americano, la región tiene un 59,7% de la población inmunizada con ambas dosis (Nuestro Mundo en Datos, 2022)³. Sin embargo, el mercado sigue preocupado por la posibilidad de nuevas restricciones y, en consecuencia, de nuevas dificultades para impulsar el crecimiento económico de la región. Otros riesgos relacionados con la cuestión sanitaria serían la escasez de pruebas de COVID-19, la infradeclaración de casos y la necesidad de aplicar nuevos calendarios de vacunación con dosis de refuerzo. Las medidas alternativas, como el pasaporte sanitario, pueden cobrar fuerza si el aumento de casos se mantiene a corto plazo. La incertidumbre sobre el impacto de la pandemia puede presentar dificultades para recuperar los niveles de empleo anteriores a la pandemia y reducir la desigualdad socioeconómica en la región.

Sociedad

Si bien los brotes pandémicos y los avances en la vacunación pueden frenar el descontento generalizado relacionado con el COVID-19 en América Latina, es probable que la fragilidad económica de la región y la desigual distribución de los ingresos sigan fomentando las manifestaciones y protestas contra los gobiernos. Las elevadas tasas de desempleo y la insatisfacción con la acción del gobierno pueden alentar manifestaciones como el "paro nacional" colombiano (2021) y el "estallido social" chileno (2019). En ambos casos, la participación en las protestas ha provocado cambios significativos en la gestión de los gobiernos, con retrocesos en la política económica en Colombia y la creación de una Asamblea Constituyente en Chile. La polarización política también potencia el descontento popular. Las disputas electorales en Chile, Perú y otros países en los últimos años demuestran la tendencia a la polarización en la política institucional, que se espera que ocurra en países con elecciones en 2022, como Brasil y Colombia. Otros países también encuentran desafíos en la

³ Our World in Data. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations, 2022.

governabilidad y en la implementación de políticas públicas, lo que plantea la posibilidad de nuevos conflictos sociales.

Según una encuesta realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022)⁴, la población de América Latina confía mucho menos en sus gobiernos que en otras regiones. El índice indica 0,29 (en una escala de 0 a 1) frente a 0,50 para el resto de los países del mundo. Los entornos políticos nacionales son factores importantes a la hora de evaluar las posibilidades de insatisfacción popular, pero los patrones regionales observados indican que el problema es sistémico y seguirá estando presente en 2022. La disociación percibida entre las instituciones públicas y los deseos de la población indica que las manifestaciones y las protestas seguirán en boga.

Intervención del Estado y Clima Empresarial

La oleada de gobiernos electos de izquierda supone un riesgo para un nivel de intervención estatal más acentuado. Aunque casi todo el espectro político adopta medidas que aumentan la intervención del Estado, es notorio que los gobiernos de izquierda tienden a adoptar más medidas que amplían la estructura del Estado y, por consiguiente, su acción en la sociedad. Con muchos países atravesando procesos electorales, también es posible que entren en escena medidas populistas, ya que su atractivo para los votantes puede aumentar las posibilidades de reelección de ciertos candidatos. Tampoco se puede descartar una mayor intervención en los mercados de divisas y cambios en los requisitos de reserva para los depósitos en 2020 y 2021. Combinado con medidas para regular los flujos de capital y estableciendo swaps de divisas con Bancos Centrales de fuera de la región, esto representó una tendencia hacia una mayor intervención en la economía que probablemente continuará mientras los tipos de cambio y los precios de los insumos no se regularicen.

Además, con la suspensión de la clasificación Doing Business sobre la facilidad para hacer negocios con los países, se espera que haya menos incentivos para adoptar medidas que mejoren el clima empresarial de los países. Este indicador era una fuente esencial de información e incentivo sobre las barreras burocráticas para que las empresas hicieran negocios en el país. Por último, no se pueden obviar los efectos continuos de la pandemia de coronavirus en la región. Con el omicron circulando en los países latinoamericanos, no se descarta la posibilidad de una mayor intervención estatal para

⁴ Banco Interamericano de Desarrollo (BID). **Confianza: la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe**, 2022.

combatirlo en 2022. Además, el regreso de ciertas restricciones, especialmente en el sector de los eventos, puede dificultar el clima empresarial, ya que implicaría un aumento de los costes y una reducción de los ingresos ligados a más normas para el funcionamiento de los actores económicos.

Regulaciones y Leyes

Se prevé que el entorno normativo presente restricciones en 2022 como consecuencia de las medidas adoptadas durante la pandemia. La relajación de las normas para evitar que ciertas actividades trasladen las posibles pérdidas al usuario final, como los bancos, será difícil de revertir. Además, es probable que la regulación de los nuevos medios de pago digitales y las criptomonedas ocupen parte de la agenda regulatoria de los países latinoamericanos. Por último, también se configurarán medidas de regulación de las inversiones y mayores exigencias medioambientales. Dado que el tema está en la agenda mundial, la región deberá adaptarse para seguir siendo atractiva y estar en línea con las nuevas regulaciones que surjan en el mundo.

Fiscal

El riesgo fiscal es uno de los temas más preocupantes para el mercado. El gasto continuo para luchar contra la pandemia y la reducción del crecimiento económico que se espera para la región reducen el espacio fiscal disponible y aumentan el riesgo de más deuda y déficit. Además, las medidas para contener la inflación, como la subida de los tipos de interés, implican un aumento del valor de las deudas vinculadas a los tipos de los países. La combinación de estos factores hace que América Latina no tenga una buena previsión para 2022, especialmente en la región sudamericana. Esta región ha experimentado una mayor presión inflacionaria y una previsión de crecimiento menor que otras partes de América Latina. El aumento de los precios de los alimentos y de la energía seguirá marcando la inflación en los países.

Medioambiente

Para 2022, desastres naturales, la persistencia de las tasas de deforestación e incendios forestales y la ausencia de políticas de cambio climático seguirán siendo los tres mayores riesgos ambientales para la región latinoamericana. Estos mismos riesgos pueden desencadenar eventos específicos, como olas de migración debido a eventos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático, como inundaciones, lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra. Además, cabe esperar una mayor

implicación de Estados Unidos en América Latina, lo que convierte al país en un actor destacado de las naciones latinoamericanas en cuestiones medioambientales, debido al fuerte compromiso del Presidente Joe Biden. También se espera que la Unión Europea se posicione como un actor importante en torno a la agenda medioambiental y la cooperación internacional con la región.

Política Internacional

No se espera que América Latina tenga una buena proyección internacional en 2022. Con la pandemia y la recuperación económica aún dominando la agenda, los países buscarán oportunidades en Estados Unidos y China para impulsar sus economías. Ambos países seguirán compitiendo por la influencia en la región, aunque no sea el foco de la política exterior de ninguno de ellos. China tiende a seguir siendo el principal socio comercial de los países sudamericanos y tratará de ampliar su presencia en los países del Caribe. Debido a las elecciones legislativas de mitad de mandato, se espera que Estados Unidos se centre en el ámbito interno, siendo la migración y la sostenibilidad las agendas prioritarias para la acción multilateral en la región. No se espera que las iniciativas de integración política regional emergentes, como la CELAC y el PROSUR, se amplíen significativamente en 2022. La cooperación multilateral regional seguirá centrándose en las organizaciones orientadas al comercio, como la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR. Al igual que en 2021, los países tienden a centrarse en el entorno interno y en la estabilización económica y política post-pandémica más que en la cooperación con los vecinos.



Eventos y Tendencias



America Latina

Elecciones y un Guiño a la Izquierda

Desde 2019, América Latina parece experimentar un nuevo paradigma. De las 12 elecciones presidenciales celebradas en la región desde entonces, 11 se han saldado con la victoria de un partido/candidato de la oposición a los gobernantes. El sentimiento antisistema se desencadenó principalmente por los grandes casos de corrupción que socavaron a los líderes partidarios y políticos, sumado a importantes manifestaciones y problemas socioeconómicos agravados por la pandemia. Este escenario se ha intensificado en los últimos años, dejando de lado un viejo tradicionalismo en el que los políticos en ejercicio, de cualquier espectro político, lograban la reelección sin demasiado coste o eran capaces de elegir a sus respectivos sucesores. Por ello, en 2022 todas las miradas estarán puestas en este movimiento de insatisfacción con las clases dirigentes en funciones. En América Latina, sólo tres países irán a las urnas en elecciones que incluyen la Presidencia y el Poder Legislativo: Brasil, Colombia y Costa Rica.

En Costa Rica, a pesar del gran número de candidatos presidenciales -25 hasta ahora- no hay grandes divergencias en sus programas de gobierno. Los principales candidatos entienden que una de las principales urgencias será gestionar la deuda pública del país, que podría alcanzar los 2.000 millones de dólares según datos recientes del Ministerio de Hacienda y las negociaciones de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El escenario que prevalece para el futuro gobierno parece apuntar a la necesidad de aumentar la recaudación de impuestos y reducir el gasto. De lo contrario, se espera que más del 50% del presupuesto federal se destine a la amortización de la deuda y los intereses. Los sondeos también apuntan a un elevado número de indecisos, y es poco probable que el resultado presidencial se defina en la primera vuelta. Hasta ahora, ninguno de los candidatos se acerca al 40% de los votos necesarios para ganar la carrera en la primera ronda. De los seis candidatos que dominan la carrera, dos representan la fuerza política tradicional del país, el expresidente José María Figueres, del Partido Socialdemócrata de Liberación Nacional, y la ex vicepresidenta Lineth Saborío, del partido conservador Unidad Cristiana. Ambos políticos representan el sector más tradicional de la política costarricense. El diputado de izquierdas José María Flórez-Estrada, del partido Frente Amplio, también puede ganar competitividad a lo largo de la carrera.

Las elecciones en Colombia y Brasil atraerán sin duda la mayor parte de la atención en 2022. La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia está prevista para el 29 de mayo. La segunda vuelta podría tener lugar el 19 de junio. Es probable que las elecciones al Palacio Presidencial

se vean influenciadas por las manifestaciones que se vienen dando en el país desde al menos 2019 y que ocasionaron el #ParoNacional en 2021. Ante este escenario, los sondeos de opinión indican que el favorito para la carrera presidencial es el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, político de izquierda y opositor al actual gobierno de Iván Duque. La atención se centra en Petro porque, si se confirman las encuestas, será el primer presidente de izquierdas que tome el mando del país. El uribismo, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, sigue intentando presentar una candidatura competitiva para superar el favoritismo de Petro y mantener su control histórico sobre el Poder Ejecutivo. Un escenario opuesto al que proyectan las encuestas podría estar alimentado por una alta polarización izquierda-derecha como ha venido ocurriendo en la historia reciente de América Latina.

En Brasil, el escenario es similar. Las actuales encuestas de opinión indican que el expresidente Lula (PT) es el favorito para la Presidencia de Brasil y supera a todos sus oponentes en todos los escenarios probados. El presidente Jair Bolsonaro (PL) se enfrenta a una enorme crisis de popularidad y trata de hacer más competitiva su candidatura apelando a los centristas, el grupo parlamentario que ocupa gran parte de la articulación política del gobierno. También apuesta por el nuevo beneficio *Auxílio Brasil*, un sustituto de *Bolsa Família*, para mejorar su imagen entre las familias de menores ingresos. La tendencia es que haya una elección menos polarizada en cuanto al número de candidatos que se presentan a las presidenciales en comparación con 2018, pero la disputa debería centrarse entre Bolsonaro y Lula. Los candidatos de la tercera vía aún tienen dificultades para superar la polarización Lula-Bolsonaro. El desempeño de Bolsonaro también es inferior cuando su nombre se pone a prueba con nombres de la tercera vía en una eventual segunda vuelta. Si este escenario se cumple, Bolsonaro sería el primer presidente desde la redemocratización que no logra la reelección en el cargo. Es probable que el actual presidente apueste por un discurso contundente contra otras instituciones en caso de derrota. Se esperan algunas manifestaciones de impugnación de este resultado entre el segmento más ideológico de Bolsonaro, pero las instituciones democráticas de Brasil aún pueden contener cualquier movimiento excesivo en este sentido.

La victoria de Lula en Brasil y de Petro en Colombia podría representar un nuevo momento para la ola progresista en América Latina. Desde 2019, a excepción de Daniel Ortega en Nicaragua, la mayoría de las elecciones en la región han declarado la victoria de los candidatos de la izquierda después de un período de aumento de los gobiernos de la derecha: Alberto Fernández en Argentina (2019), Luiz Arce en Bolivia (2020), Pedro Castillo en Perú (2021), Xiomara Castro en Honduras (2021) y, recientemente, Gabriel Boric en Chile (2021). El nuevo giro podría estar motivado por el sentimiento de insatisfacción que ha impulsado al centroderecha en los últimos años, pero esta vez la pandemia de coronavirus y las respuestas a la crisis sanitaria son un peso importante para los votantes. Sin embargo, no se espera por el momento un vuelco similar al de la "marea rosa" de los años 2000, principalmente porque los

electos heredarán un escenario diferente al del otro periodo. Además de las incertidumbres relacionadas con la pandemia, esta vez los electos se enfrentarán a una América Latina con un crecimiento moderado, mayor presión inflacionaria y mayores tasas de deuda pública (CEPAL, 2022)⁵.

MAPA 1: REGÍMEN Y ÍNDICE DE DEMOCRACIA POR PAÍS EM AMÉRICA LATINA

Fuente: Índice de Democracia 2020. Economist Intelligence Unit.



⁵ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). **Balace Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe**, 2022.

TABLA 1: CALENDARIO DE ELECCIONES EN AMERICA LATINA EN 2022

FECHA	PAÍS	EVENTO
6 de febrero	Costa Rica	Elecciones Presidenciales y Parlamentarias
13 de marzo	Colombia	Elecciones Parlamentarias
29 de mayo	Colombia	Elecciones Presidenciales
5 de junio	Mexico	Elecciones para Gobernador en seis Estados, 39 alcaldías y 25 ayuntamientos
19 de junio	Colombia	Elecciones presidenciales: segunda vuelta
4 de julio	Chile	Plazo para que la Asamblea Constituyente presente el nuevo texto constitucional *
Septiembre/octubre	Chile	Plebiscito de ratificación o salida para una nueva constitución*
2 de octubre	Brasil	Elecciones presidenciales y Parlamentarias
2 de noviembre	Peru	Elecciones estatales y municipales

Economía

La alta inflación y el bajo crecimiento económico marcarán a América Latina en 2022. Este escenario llega después de un crecimiento relativamente alto en 2021 debido a la baja base comparativa con 2020 y a la persistente crisis en la cadena productiva que afecta al mundo. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2022)⁶, la región debería crecer un 2,1% en 2022, después de haber tenido un crecimiento promedio del 6,2% en 2021. Además, se espera que el escenario inflacionario, que mostró una aceleración de los precios del 7,1% en 2021 (excepto Argentina, Haití, Surinam y Venezuela), se mantenga por encima de las metas inflacionarias de los países en 2022, convergiendo al centro de la meta a finales del año o principios de 2023.

El bajo crecimiento se debe a una asimetría entre los países desarrollados y los países en desarrollo en la aplicación de políticas para hacer frente a la crisis económica desencadenada por la COVID-19. En 2021, sólo 11 de los 33 países de la región lograron volver a los niveles económicos anteriores a la pandemia, y se espera que en 2022 otros 3 países logren este objetivo.

La lucha contra la inflación también obstaculiza el crecimiento económico. Al eliminar los incentivos de la economía mediante una política de aumento de los tipos de interés, hay menos incentivos para el gasto en los países, lo que reduce la demanda y, en consecuencia, la producción de bienes. A pesar de ser un instrumento importante para combatir la inflación, se espera que la presión inflacionaria siga presente en 2022 debido al aumento de los precios de los insumos (y no al aumento de la demanda). Esto, unido al hecho de que aún no se ha recuperado el 30% de los empleos perdidos en 2020, desencadena una situación muy compleja en la región para 2022.

Pandemia

América Latina fue la región más afectada por la pandemia de coronavirus, en términos sociales y económicos, registrando un tercio de las muertes del mundo. América del Sur se convirtió en el epicentro de la pandemia, convirtiéndose posteriormente en una referencia en la vacunación mundial contra el COVID-19. Según la CEPAL (2022)⁷ los efectos de la pandemia aún serán visibles durante el 2022, principalmente porque el crecimiento económico proyectado para América Latina no es suficiente para superar el crecimiento de los índices de desempleo y pobreza en la región. Por lo tanto,

⁶ CEPAL, *op. cit.*

⁷ CEPAL, *op. cit.*

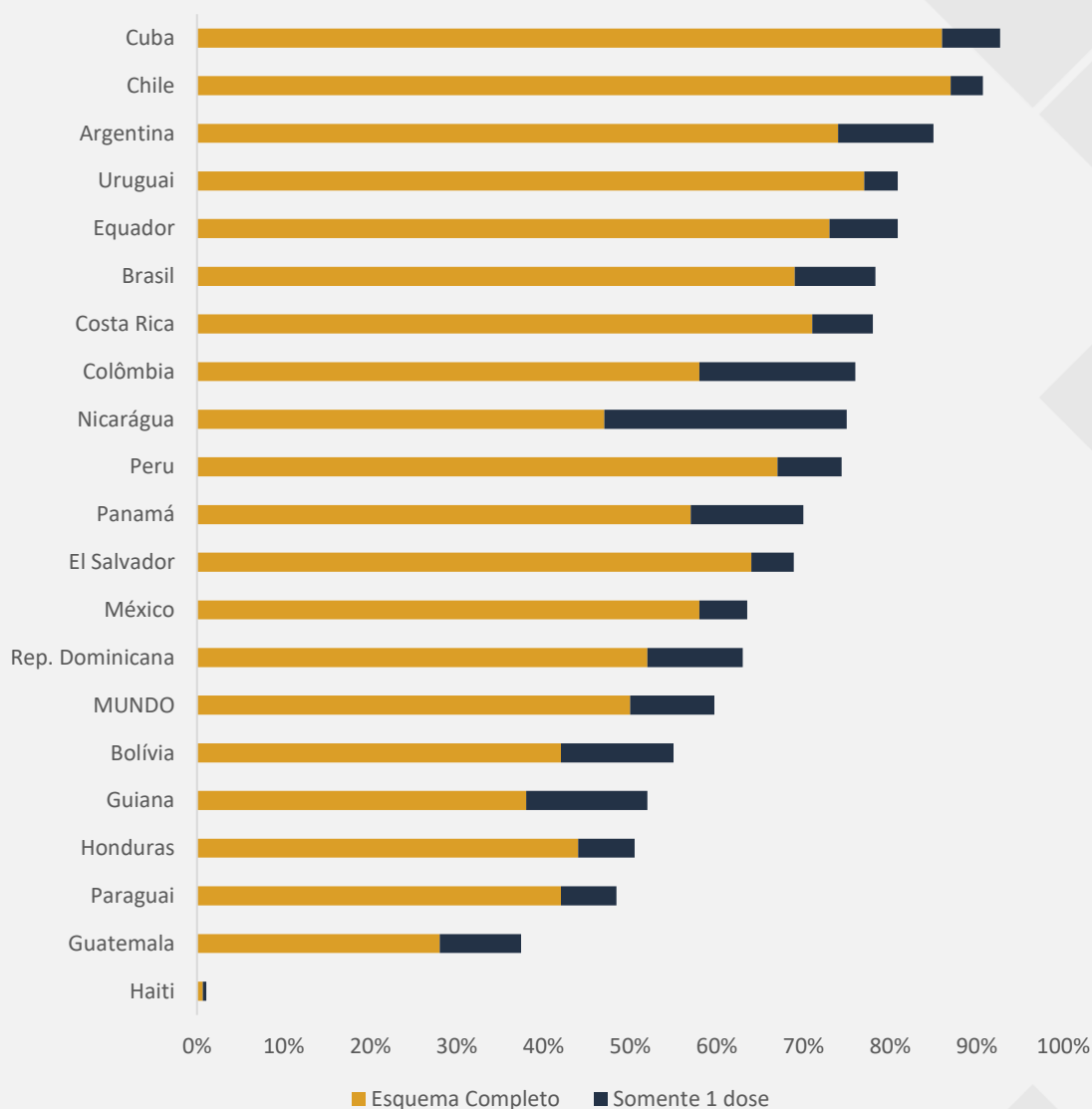
la gestión de la pandemia deberá seguir afectando las acciones de los gobiernos latinoamericanos. La vacunación seguirá siendo el principal reto, ya que la región sólo tiene el 39% de su población totalmente vacunada. Los impactos de la nueva variante omicron siguen presionando a los gobiernos para que haya cierta urgencia en las campañas de dosis de refuerzo. Es probable que varias organizaciones internacionales aboguen por un mayor gasto público en sanidad, sobre todo a corto plazo, para contener nuevos impactos de la pandemia. En relación con las cuestiones económicas y las dificultades para alcanzar los niveles prepandémicos, los gobiernos deberían ser más cautelosos a la hora de aplicar nuevas restricciones, lo que podría obstaculizar aún más el crecimiento económico de la región. Es probable que la aparición de nuevas variantes siga siendo el principal riesgo vigilado, sobre todo debido a la desigualdad de acceso a la vacuna.

Los sectores que han sufrido restricciones en los últimos dos años, como los sectores de eventos y de servicios, pueden seguir sintiendo el impacto económico a largo plazo de la pandemia pero en un grado mucho menor. Dado que gran parte de los países de la región dependen del turismo, debería haber presiones para que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anuncie durante el año una armonización normativa sobre los inmunizantes, para flexibilizar a los residentes de los países que condicionan la entrada de extranjeros a determinados inmunizantes.

La mayoría de los países han experimentado un aumento de los casos de omicron mucho más rápido que los picos anteriores. Aunque las probabilidades de desarrollar una enfermedad grave han disminuido, la propagación más acelerada de la nueva cepa sigue siendo un reto para los sistemas sanitarios latinoamericanos. Por lo tanto, se espera que los picos continuos sean más o menos perturbadores, dependiendo de la calidad del muro de inmunidad construido en cada país, la capacidad del sistema sanitario y las inversiones en el sector de la salud pública.

Población vacunada en América Latina

Fuente: Our World in Data, 2022.



Migracion

Es probable que la marea migratoria internacional que está viviendo la región continúe hasta 2022. Además, el control de las fronteras en las Américas se ha convertido en un importante problema de gestión de la migración en medio de la pandemia. La migración desde Haití, Cuba, Centroamérica, Venezuela y Colombia muestra signos de movilidad continua dentro de las Américas, específicamente hacia Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos. Es probable que la migración desde otros países de la región, como Guyana, Paraguay y Bolivia, también muestre incrementos en un futuro próximo.

Se estima que la migración desde los países de América Latina y el Caribe crecerá por encima del 6% durante 2022. Esta cifra es más del doble de la tasa de crecimiento de la población en los países de destino. El flujo migratorio puede combinarse con el aumento de un discurso anti-inmigración en países con políticas públicas inadecuadas para gestionar a los migrantes. Estados Unidos debe seguir enfocando parte de su política exterior en frenar el flujo migratorio centroamericano mientras intenta revertir gran parte de las políticas de la era Donald Trump. Dada la complejidad del tema, es probable que los países opten por acciones multilaterales para responder efectivamente a la crisis migratoria.

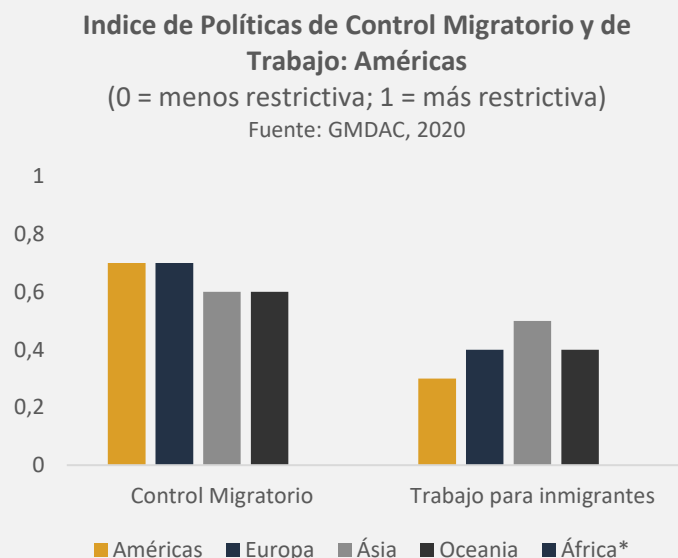
La migración también será un reto para los nuevos gobiernos que se enfrentan a una alta polarización del tema en sus respectivos países, como en el caso de Chile, con Gabriel Boric, y el presidente colombiano. El sentimiento anti-inmigración ha crecido significativamente entre los segmentos más conservadores en ambos países, obligando a las nuevas administraciones a repensar políticas públicas más efectivas para contener y adaptarse a los flujos migratorios. A medida que los migrantes llegan a países que no son históricamente destinos de migrantes, como Panamá, Ecuador o Chile, los desafíos de hacer políticas públicas inclusivas presumiblemente marcarán el discurso político. Es importante considerar que, además de las cuestiones socioeconómicas, los expertos han advertido que los impactos del cambio climático podrían intensificar los flujos migratorios, obligando a una acción conjunta entre las agendas de medio ambiente y migración en varios países. Esto implica que la migración no es un fenómeno exclusivamente nuevo en América Latina, sino que son muchos los factores que potencian estos movimientos.

Una de las características de la crisis migratoria en América Latina es el patrón de movimiento intrarregional. Por razones económicas, Argentina, Brasil y Chile son los países más buscados. Venezuela sigue siendo el país con mayor número de inmigrantes que salen en busca de mejores condiciones de vida. En los últimos cinco años, más de cinco millones de venezolanos han emigrado a otro país (OIM, 2021)⁸. Una de las principales preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil es que la pandemia ha impulsado el cierre de fronteras, el endurecimiento de las normas para la obtención de visados legales y el aumento de las prácticas y el discurso xenófobo, lo que aumenta la vulnerabilidad de este grupo social. En 2020, más de 10,9 millones de inmigrantes en todo el mundo procedían de Sudamérica. Considerando América en su conjunto, Estados Unidos (50 millones), Canadá (8 millones), Argentina (2,3 millones), Colombia (1,9 millones) y Chile (1,6 millones) tienen los índices más altos como países de destino final de los inmigrantes (GMDAC, 2022)⁹. El índice también señala que América es una de las regiones más estrictas en cuanto a la política de control migratorio

⁸ Organización Internacional para las Migraciones (OIM). **World Migration Report 2022**, 2021.

⁹ Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC). **Migration Data Portal**. Acceso en diciembre, 2021.

(0,7), escenario que se ve favorecido por las políticas anti-inmigración en tiempos de crisis económica. Por otro lado, las políticas laborales para los inmigrantes son más flexibles (0,3), mientras que el colectivo representa el 7% de la población desempleada en la región.



Relación con China

A posición de Estados Unidos de no dar prioridad a la región en su política exterior puede abrir un espacio para que China consolide aún más su posición. Las asociaciones comerciales seguirán siendo el centro de atención de China, y las inversiones en infraestructuras seguirán siendo un medio esencial de asignación de recursos. Pekín también pretende ampliar sus actividades al Caribe debido a su posición geopolíticamente relevante (cerca de EE. UU.) y en países más receptivos a sus inversiones (con gobiernos de izquierdas). Aunque China no suele limitar sus inversiones a países políticamente alineados, el auge de los gobiernos de izquierda en la región sumado a la fragilidad económica debido al COVID representan una oportunidad para aumentar su presencia, aunque otras naciones sigan siendo importantes socios comerciales. Aun así, es posible que América Latina no sea la prioridad de la política exterior china, que seguirá centrándose en los socios de Asia y África.

La crisis de la cadena de suministro iniciada en 2021 seguirá impactando en las acciones de China durante 2022 a nivel internacional. Las continuas dificultades para aumentar los flujos comerciales debido a la falta de insumos y transporte afectan de manera especialmente severa al país asiático, y es probable que sigan impactando en América Latina. En este sentido, estas dificultades pueden limitar su capacidad de expandir su influencia en la región a través del comercio, especialmente si afecta a los flujos con países clave. A pesar de ello, el protagonismo de China como socio comercial de

los países, especialmente en Sudamérica, debe mantenerse. La situación económica de muchos de ellos es aún frágil y, en la mayoría de los países, existe una fuerte dependencia de la exportación de materias primas, lo que mantiene a Asia como un socio esencial para la región.

Así, un escenario de crecimiento económico más sólido en el país asiático podría implicar mejores índices de recuperación económica en la región. Es probable que la relación China-América Latina siga basándose en una lógica de complementariedad entre las economías. China ocupa actualmente un lugar destacado en el comercio internacional de la región, disputando este protagonismo con Estados Unidos. Habitualmente, los países latinoamericanos buscan beneficiarse a través de esta estrategia entre las dos hegemonías, optando por negociaciones con ambos países en espacios y prioridades diferentes. La tendencia es que el país asiático utilice los principales foros y acciones multilaterales para expandir su acción en la región, como la CELAC y las inversiones a través del ambicioso *One Belt One Road*.

Relación con Estados Unidos

Estados Unidos podría no centrar su actividad diplomática en América Latina en 2022. El primer año de Biden en la Casa Blanca ha consolidado la expectativa de que la política exterior norteamericana vuelva a tener un enfoque multilateral y a las alianzas tradicionales que han perdido fuerza durante la administración republicana de Trump. La política del Gobierno estadounidense hacia América Latina fue bastante tímida en 2021, lo que probablemente se repita este año. Las elecciones legislativas de mitad de mandato también pueden orientar el capital político de Washington hacia cuestiones internas, relegando aún más a la región a un segundo plano. Se espera que los países del Caribe y Centroamérica reciban la mayor atención del país debido a su proximidad con el territorio estadounidense y a la crisis migratoria que ha surgido en los últimos meses.

Las asociaciones y los flujos comerciales seguirán siendo bastante importantes en la relación con los países de la región. A pesar de haber dejado de liderar el ranking de socios comerciales de muchos países sudamericanos, EE. UU. mantendrá sus esfuerzos para no perder más espacio frente a China, aunque con pocas perspectivas de establecer una política coherente para combatir los avances de China en el continente. En este sentido, la posición de antagonismo comercial entre los países que ha dominado el panorama en los últimos años debería mantenerse, con pocas posibilidades de que EEUU cambie la influencia china en el continente.

Los temas prioritarios de la política exterior estadounidense serán la migración, el medio ambiente y la seguridad, especialmente en la relación con los países más al norte del Ecuador. La crisis migratoria que afecta a Centroamérica y las controversias sobre la gestión estadounidense de la frontera con México mantendrán el tema en el radar político interno tanto de la Casa Blanca como del Congreso, lo que refuerza significativamente la importancia de la migración en la agenda política estadounidense.

Los temas horizontales como la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente también pueden ser más prominentes, pero probablemente se plantearán en los escenarios multilaterales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) u otras organizaciones internacionales. Otro punto preocupante para Washington es el crecimiento de los gobiernos autoritarios en la región. El país puede utilizar instancias multilaterales como la Cumbre de la Democracia para reducir el riesgo y una posición más crítica a través de sanciones contra regímenes como Venezuela y Nicaragua. Además, las elecciones presidenciales en Colombia son sensibles en cuanto a las alianzas geopolíticas en la región, ya que un político muy izquierdista lidera las intenciones de voto en el principal aliado de Estados Unidos en Sudamérica. Un cambio de gobierno en el país, históricamente conservador, podría hacer que el gobierno de EE. UU. se fijara en la región en los próximos años.

Relación con la Union Europea

Se espera que la relación con la Unión Europea (UE) esté guiada por cuestiones medioambientales, especialmente en lo que respecta a los países de la región amazónica y la deforestación de los bosques. La política medioambiental del bloque ha sido una prioridad tanto a nivel interno como en su agenda de política exterior, y se espera que esto continúe en 2022. El liderazgo del presidente francés Emmanuel Macron en el Consejo del bloque entre enero y junio debería marcar el tono del discurso del bloque para el resto del año. Francia es uno de los países que más se hace oír en el discurso del desarrollo sostenible, y la retirada de Merkel como canciller de Alemania refuerza la posición destacada de Macron dentro de la UE. En este sentido, temas como la imposición de emisiones de carbono a los productos importados y la legislación para frenar la deforestación ilegal tienden a avanzar en 2022 y a impactar en los países latinoamericanos.

En cuanto a los temas comerciales, el bloque debería seguir siendo el socio más relevante para la región después de China y Estados Unidos, incluso si se implementan nuevas barreras relacionadas con el medio ambiente. El Acuerdo de Libre Comercio entre el bloque y el MERCOSUR es la iniciativa

más destacada, pero tiene pocas perspectivas de avances significativos. Varios gobiernos europeos siguen siendo escépticos sobre los compromisos medioambientales asumidos por Brasil y deben esperar a las elecciones presidenciales en el país para retomar los esfuerzos de negociación. Las partes ya han firmado el acuerdo, pero debe ser interiorizado y ratificado por los países miembros individualmente.

Multilateralismo

No se esperan avances significativos en la cooperación regional para 2022. Los avances regionales expresivos en materia de vacunación no se han producido de forma concomitante con el aumento de la cooperación regional, como ha ocurrido en Europa, y las diferencias políticas sustanciales tienden a mantener limitadas las iniciativas multilaterales. Es probable que los movimientos internos significativos en países clave como Colombia y Brasil restrinjan el impulso de integraciones más amplias, especialmente en Sudamérica. El PROSUR (Foro para el Progreso y el Desarrollo de América del Sur) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) tienden a mantenerse como organizaciones politizadas sin muchos resultados concretos, mientras que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se enfrenta a la resistencia de algunos países y no avanza. Por lo tanto, es poco probable que se alcancen a corto plazo los niveles de cooperación observados a principios de la década de 2010.

Estados Unidos podría proponer iniciativas multilaterales para abordar la crisis migratoria del continente, principalmente a través de la Organización de Estados Americanos (OEA). La organización acogerá una reunión entre representantes de sus 34 miembros en la que se debatirán varios temas, y las cuestiones migratorias deberían plantearse como una prioridad de la administración Biden para la región. El desarrollo sostenible también se destacará en las reuniones, ya que es la prioridad de la cooperación multilateral de varios organismos regionales y no regionales.

Desde el punto de vista de las organizaciones orientadas al comercio, la Alianza del Pacífico puede sufrir algunos avances puntuales, con el nuevo gobierno chileno destacando su importancia para el país y el gobierno ecuatoriano buscando acelerar su ingreso definitivo al bloque comercial. En el MERCOSUR, la perspectiva es de pocos avances concretos en la agenda de integración del bloque. Es poco probable que los países logren avances significativos en las negociaciones de acuerdos amplios en 2022. Es probable que el acuerdo Mercosur-Unión Europea siga sufriendo obstáculos, especialmente debido a las críticas dirigidas a la política medioambiental de Brasil. Con las elecciones presidenciales y la posibilidad de un cambio en el liderazgo del país, el bloque europeo tiende a no discutir el texto internamente. La presidencia de Francia -uno de los mayores opositores al acuerdo-

www.bmj.com.br

en el Consejo de la UE confirma esta perspectiva, y es probable que el bloque siga criticando a Brasil en relación con su política medioambiental.



Brasil

Agenda Social

El surgimiento de nuevas variantes puede seguir siendo el principal riesgo relacionado con la pandemia debido al acceso asimétrico a las vacunas y a los movimientos anti-inmunización en varios países. Cabe destacar que la adherencia de la población brasileña a la vacunación es superior a la media mundial, lo que hace que el país pueda mitigar mejor los efectos con el avance de las variantes. Los gobernadores estarán bajo alta presión electoral y pueden ser más resistentes a crear restricciones significativas en las actividades presenciales. El gobierno federal también puede tener un gasto significativamente menor para hacer frente a la enfermedad. Es probable que los estados y los municipios sigan al frente de la aplicación de las contramedidas de la pandemia, como los pasaportes de vacunación y las medidas restrictivas locales. Es posible que los funcionarios públicos tengan que rendir cuentas por la mala gestión de la enfermedad debido a iniciativas como el IPC de la pandemia, pero no es probable que el presidente Jair Bolsonaro y otros funcionarios federales tengan que rendir cuentas significativas en este sentido en 2022.

El avance de la pandemia y la dependencia de la población de la Ayuda de Emergencia, combinados con un alto índice de rechazo al gobierno, impulsaron las discusiones en torno a los programas de transferencia de ingresos que estarán vigentes en 2022. Auxílio Brasil es ahora el principal programa en este sentido. Fue reglamentado en noviembre de 2021 y entró en vigor con un ticket promedio de 217 BRL, aumentando posteriormente a de al menos 400 BRL hasta el final de 2022. Esto implica un mayor riesgo fiscal, ya que todo el programa con el beneficio representará BRL 50 mil millones más en el presupuesto. Por otro lado, ha sido necesaria la negociación de una limitación en el pago de los bonos judiciales en 2022 y un cambio en la regla de cálculo del techo de gasto, lo que implica una mayor atención del mercado sobre la cuestión fiscal del gobierno. Es poco probable que el beneficio adicional se limite a 2022 si se mantienen las perspectivas de crecimiento económico y de desempleo.

Gobierno y Instituciones Públicas

La afiliación de Bolsonaro al Partido Liberal (PL) incluye el alineamiento automático con el llamado *centrão* - grupo multipartidario de centro-derecha que apoya al gobierno - pero no se limita al nuevo partido. Bolsonaro tiende a elegir un vicepresidente que forme parte del grupo parlamentario y a contar con líderes de la vieja política en su gabinete de campaña. Este movimiento, sin embargo, no significa necesariamente el vaciamiento completo de otras fuerzas centrales, como los nombres

técnicos, militares e ideológicos, ya que algunos siguen siendo pilares centrales para mantener distintos nichos del electorado de Bolsonaro. También es posible esperar que, a pesar de la alineación, el *centrão* siga comprometido con temas menos controvertidos, como la agenda económica y de reformas. A pesar de ello, es poco probable que apoye automáticamente la agenda aduanera y conservadora del presidente Bolsonaro. Además, la migración de Bolsonaro al PL, que puede formar la bancada más extensa de la Cámara, tiende a facilitar el proceso de negociación en el Congreso en el corto plazo. Mantener nombres técnicos en posiciones estratégicas en el equipo económico y en otros gabinetes será uno de los principales desafíos para acomodar el *centrão* y los intereses del sector privado. El alineamiento con la actual estructura política del gobierno también puede impulsar el avance de otras agendas más técnicas relacionadas con el agronegocio, sobre todo teniendo en cuenta la relación entre Bolsonaro y Arthur Lira (PP/AL), que entrará en 2022 en su último mandato como presidente de la Cámara. Aun así, se puede considerar que la relación con el Senado Federal puede seguir siendo inestable: El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), puede seguir adoptando una posición más independiente respecto al Palacio Presidencial que la Cámara.

De los 23 ministros del gobierno de Bolsonaro, seis ya han confirmado que dejarán sus cargos para presentarse a la reelección en la Cámara de Diputados, y otros tres ministros podrían presentarse a los gobiernos estatales. De acuerdo con las reglas electorales, los ministros, jueces y militares tienen hasta el 2 de abril para realizar el proceso de inhabilitación de sus cargos si pretenden postularse a algún cargo electivo en 2022. Los cambios pueden abrir el espacio para que el *centrão* ejerza presión para cubrir las vacantes temporales. En una eventual victoria del presidente Bolsonaro en las elecciones de 2022, el grupo parlamentario también puede seguir dominando la agenda política del gobierno y ejercer presión para ocupar más espacio en posiciones estratégicas en los ministerios.

Presidencias del STF y el TSE

La magistrada Rosa Weber presidirá el Tribunal Supremo (STF) a partir de septiembre de 2022. Así, el magistrado Luiz Fux permanecerá en el cargo durante la mayor parte del año y durante la proximidad de la primera vuelta de las elecciones, pero lo dejará en el mes anterior a las mismas. Rosa Weber tiene un perfil más discreto que la mayoría de sus compañeros. Aun así, ya ha decidido en contra del gobierno en múltiples ocasiones en casos relacionados con la pandemia. En algunos casos, Weber puede tener una postura de confrontación, especialmente si se trata de ataques al propio STF. El gobierno se enfrenta a importantes juicios el próximo año, y una presidencia menos favorable podría perjudicar su resultado, aunque no de forma muy significativa. A su vez, el juez Luís Roberto Barroso

entrega la presidencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) al juez Alexandre de Moraes en agosto de 2022, dos meses antes de la primera vuelta de las elecciones. Moraes tiene un historial de fricciones con el presidente Jair Bolsonaro, y puede mantenerse un escenario de tensión durante la campaña electoral de 2022. Moraes es el relator en el STF de las cuestiones relativas a la difusión de noticias falsas. Esta posición generó varias críticas por parte del juez Moraes al gobierno y tiende a ser un punto llevado al TSE durante y después de la campaña, sobre todo teniendo en cuenta que Moraes ya ha indicado que va a seguir participando en el tema. El TSE puede establecer sanciones más estrictas para la clase política involucrada en la difusión de noticias falsas y otros delitos electorales para las candidaturas legislativas.

Elecciones

Las elecciones municipales de 2020 señalaron que el sentimiento antisistema había perdido fuerza entre los votantes brasileños, y la población optó por políticos más experimentados en la gestión de la maquinaria pública. La expectativa es que este escenario se mantenga en las elecciones de 2022, lo que ya se nota en los resultados de las encuestas. La pérdida de fuerza del sentimiento antisistema es una tendencia a nivel internacional, con movimientos de la llamada antipolítica que mantienen el apoyo de nichos específicos pero con poca fuerza para encabezar listas presidenciales victoriosas. Los nuevos participantes y los movimientos que tratan de distanciarse de la "vieja política" pueden seguir teniendo representación en el Congreso, pero con menos posibilidades de hacer frente al *centrão*.

Con el escenario incentivando a los políticos conocidos, la polarización entre Bolsonaro y Lula da Silva en la carrera presidencial es alta. Ambos candidatos son ampliamente conocidos por la población y tienen una base de votantes fieles. También es dudoso que ambos reciban menos del 20% de los votos válidos en la primera vuelta. Los efectos de la pandemia y la lentitud del crecimiento económico dan a Lula da Silva una ventaja momentánea. Sin embargo, este escenario puede cambiar con la ampliación de las políticas de transferencia de ingresos y la intensificación de las campañas que recuerdan los escándalos de corrupción de la administración del PT. Actualmente, varios postulantes se han presentado en la carrera como una candidatura competitiva de tercera vía, pero con la excepción de Ciro Gomes (PDT) y Sergio Moro (Podemos) ninguno marca más de dos dígitos en las encuestas.

El antibolsonarismo será una de las principales líneas narrativas que explorarán los candidatos presidenciales opositores al gobierno federal. Se espera que el presidente Jair Bolsonaro sufra las críticas más directas y mantenga los mayores índices de rechazo durante la campaña electoral,

especialmente en la primera vuelta. Una disminución significativa de los índices de rechazo al gobierno depende de la ampliación de los programas de transferencia de ingresos. Aun así, el sentimiento anti-PT, que tuvo un papel vital en las elecciones de 2018, puede seguir siendo relevante en 2022. Bolsonaro y los candidatos de la tercera vía también pueden explorar esto. Los candidatos alternativos tendrán que oponerse a los dos espectros que actualmente polarizan el debate. Lula da Silva puede buscar una figura moderada y con buena relación con el mercado para ocupar la vicepresidencia en su candidatura para mitigar este escenario y dialogar con un electorado más amplio. Sin embargo, el posicionamiento incoherente del expresidente, que sigue relativizando los regímenes autoritarios de izquierda y mencionando agendas controvertidas como la regulación de los medios de comunicación, puede ser munición para sus adversarios.

El presidente Bolsonaro puede ser señalado como el principal responsable del alto número de muertes y casos por el COVID-19 en el país. Al mismo tiempo, puede seguir reiterando que sus acciones fueron motivadas para preservar la economía. Es posible que la pandemia esté mayormente controlada en los meses previos a las elecciones, reduciendo su impacto en las promesas y campañas electorales. Un escenario similar de utilización discursiva de la pandemia puede darse en las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado, aunque de forma más reducida que en las carreras al Ejecutivo. Los legisladores elegidos pueden involucrarse con el tema para destacar sus contribuciones durante la pandemia, pero de manera limitada, ya que las medidas más concretas al respecto fueron encabezadas por los Poderes Ejecutivos federales o estatales.

Economía

La falta de control de la inflación observada en 2021, con unos precios internos que alcanzaron niveles históricos, probablemente pesará en la política de este año. No se vislumbra una reducción drástica del nivel de precios en el horizonte a corto y medio plazo, lo que hará que los presupuestos de los hogares se reduzcan y creará presión sobre el gobierno. En particular, se espera que la crisis de la cadena de suministro y los precios de los combustibles afecten a los precios y al crecimiento económico en 2022. El Gobierno será más duro en el control de la inflación, y su principal arma para ello es el tipo de interés básico. Su aumento para controlar la inflación conlleva una reducción del ritmo de crecimiento de la actividad económica. Si el remedio es más potente de lo necesario, este crecimiento puede reducirse de forma que aumente el desempleo. La autonomía recientemente adquirida por el Banco Central favorece que la institución consiga mantenerse al margen de las presiones políticas y siga adoptando un enfoque medido en los ajustes de los tipos de interés.

Es probable que la actividad económica crezca en 2022, pero no al mismo nivel que en 2021. Esto se debe a que 2021 fue un año atípico para la actividad económica. Las economías que salen de recesiones y crisis, como fue el caso en 2021 tras el fuerte descenso de 2020, suelen tener una tasa de crecimiento superior a la media en el periodo siguiente. Después de este aumento significativo, no vemos una tendencia a impulsar la actividad al mismo nivel. Es probable que esto ocurra en 2022, ya que el crecimiento volverá a ser el mismo que antes o más bajo.

La inversión extranjera directa en 2022 dependerá principalmente de las tensiones internas debidas a las elecciones y del crecimiento económico. Ambos factores suponen un riesgo para los inversores extranjeros, que ya han demostrado que no están dispuestos -en su mayoría- a afrontar el tipo de estrés sufrido por la pandemia en Brasil. El llamado "coste Brasil" hace que los inversores sean más conscientes de los problemas internos que pueden afectar a su negocio. No se espera una reducción del nivel de IED como la que se produjo en 2020, a pesar de la posible inestabilidad (que puede no intensificarse a lo largo del año). Aunque sea algo modesto, el retorno de los inversores en 2021 demuestra que el país sigue atrayendo negocios y ofrece rentabilidad. Lo más probable es que las tasas de inversión sean más elevadas que en 2021, debido a la estabilidad interna y al vacío creado por la pandemia.



Argentina

Fondo Monetario Internacional

Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar 44.500 millones de dólares de deuda. Este nuevo acuerdo es una buena noticia para la administración de Fernández, ya que podría permitirle consolidar su proceso de recuperación y reducir las incertidumbres de inversores y empresas. En cuanto al acuerdo inicial, Argentina continuará con los controles de precios como parte de su estrategia de inflación, así como con la política cambiaria actualmente en vigor, sin grandes saltos de devaluación. Además, el gobierno no buscará una reforma laboral ni privatizará empresas públicas; así, el gobierno ganará más tiempo para ordenar las cuentas públicas y llegar a las elecciones de 2023 con un escenario más optimista tras perder las elecciones legislativas de medio término en noviembre.

Algunos de los principales puntos del acuerdo son:

- Meta de un déficit fiscal primario del 2,5% en 2022, del 1,9% en 2023 y del 0,9% en 2024;
- Planes de reducción de la emisión monetaria, reduciendo la asistencia del Banco Central al Tesoro al 1% del PIB en 2022, al 0,6% en 2023 y a "casi cero" en 2024.

Las metas de reducción del déficit fiscal planteadas por el FMI son muy desafiantes para Argentina, ya que no habría impuestos extraordinarios en 2022, ni nuevos aumentos en la tributación de los granos. Para el FMI, la prioridad es contar con proyecciones macroeconómicas que muestren cómo Argentina generará divisas a partir de políticas que permitan el crecimiento de la economía sin recurrir a nuevo endeudamiento público.

El acuerdo político con el FMI también depende de los asuntos internos. El gobierno necesita mostrar el apoyo del Fondo a un eventual pacto de la mayor cantidad de partidos políticos, especialmente aquellos con fuerte presencia en el Congreso y con posibilidades electorales de ocupar cargos ejecutivos en el futuro. Por ello, para mejorar la credibilidad y la confianza, el Gobierno deberá aportar un plan de estabilización consensuado con los principales actores sociales de la oposición, pero también con los movimientos sociales, los sindicatos y los empresarios.

Aunque Fernández ha declarado que este acuerdo no contempla restricciones que puedan retrasar el desarrollo del país, el bloque más izquierdista del peronismo no está de acuerdo con el plan. Así, una parte del kirchnerismo cree que dicho programa dificultaría el crecimiento económico del país. En cuanto al documento final que debe ser enviado al Congreso Nacional para su aprobación, el personal del FMI y las autoridades argentinas continuarán su trabajo para alcanzar un acuerdo a nivel del personal a principios de 2022. Un acuerdo final sobre un arreglo de programa estaría sujeto a la

aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI. Negociar con la oposición y mantener la unidad de la coalición gobernante serán los próximos retos para el Gobierno.

Base Governante

La derrota en las elecciones de medio término de noviembre fue un gran golpe para la coalición del Frente de Todos, ya que intensificó las tensiones dentro del partido gobernante. Hay que tener en cuenta que el peronismo es un movimiento político que aglutina a diversos sectores sociales opuestos dentro de su propia estructura suprapartidaria, coexistiendo con orientaciones altamente conflictivas. Así, en la actualidad, dentro de la actual base gobernante, existen marcadas diferencias entre tres movimientos:

- El kirchnerismo: Se refiere a los aliados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es el bloque más izquierdista del peronismo, con consignas más intervencionistas y mayor participación del Estado en los procesos macroeconómicos.
- El albertismo: De tendencia moderada, son más cercanos al presidente Alberto Fernández. Cuenta con el apoyo de sectores tradicionales del peronismo.
- Frente Renovador: Responde al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Uno de los principales retos de la coalición gobernante en los próximos meses será preservar la unidad y reforzar los lazos con los aliados en las provincias para alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI e inyectar más de 45.000 millones de dólares en el pago de la deuda. Las negociaciones con el Fondo han suscitado tensiones, ya que los sectores más pragmáticos del peronismo apoyan el acuerdo con el FMI para evitar un impago, mientras que el ala más radical se resiste a los recortes propuestos en el gasto público y los subsidios, l aboga por una postura más radical del gobierno frente a las exigencias del FMI.

Es probable que los gobernadores peronistas y la Confederación General del Trabajo (CGT) se conviertan en las principales bases de apoyo político de Alberto Fernández para garantizar la gobernabilidad del país. A largo plazo, la alianza con sectores regionales busca crear un espacio favorable para su reelección en 2023, a pesar de su derrota en las elecciones de medio término. En los próximos dos años, la mayor parte de las actividades de Fernández deberían centrarse en una agenda orientada a su posible reelección. Mientras tanto, Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, se ha convertido en una pieza clave de la coalición Frente de Todos.

En algunos segmentos se baraja la posibilidad de que Máximo sea candidato a la Presidencia en 2023, lo que podría culminar en nuevas tensiones entre las fuerzas centrales del Gobierno.

Oposición

El nuevo Congreso surgido en las urnas el pasado mes de noviembre se mantendrá con Alberto Fernández durante los próximos dos años. Es indispensable resaltar que el oficialismo perdió el quórum propio en el Senado por primera vez desde el retorno de la democracia, al pasar de 41 a 35 senadores. En la Cámara de Diputados, de las 127 bancas, el Frente de Todos obtuvo 50, mientras que Juntos por el Cambio obtuvo 61. Así, la nueva relación de fuerzas puede poner a prueba la unidad del peronismo para acordar una agenda común, en medio de crecientes tensiones internas.

Tras perder las elecciones legislativas de mitad de mandato, el Gobierno tendrá que negociar en el Congreso con una oposición más fuerte. Esto podría dar lugar a controles y equilibrios más eficaces, pero también a un proceso de elaboración de políticas más volátil.

En la coalición Juntos por el Cambio, los tres partidos que la integran (el PRO de Mauricio Macri, la centenaria Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica) están divididos en ocho bloques. Las divisiones internas muestran la lucha dentro de la oposición de centro-derecha por la carrera presidencial de 2023. Las tensiones dentro de la principal alianza opositora podrían aumentar a medida que se acercan las elecciones, debilitando a los opositores del gobierno de Fernández.

Intervencionismo Estatal y Clima de Negocios

La intervención del Estado y la regulación económica son aspectos fundamentales de la política económica peronista. Así, se espera que Alberto Fernández priorice las medidas de control en diferentes segmentos de la industria para reducir las expectativas de devaluación y contener la inflación. Sin embargo, estas medidas pueden provocar el consiguiente aumento de los desequilibrios de los precios relativos e impedir las oportunidades de inversión y comercio.

Los programas de estabilización de los precios de los alimentos deberían prolongarse a lo largo de este año. En cuanto a la industria farmacéutica, se espera que el gobierno aplique precios de referencia

para los medicamentos, tras el acuerdo de congelación temporal de precios alcanzado con los laboratorios el pasado mes de noviembre. Los acuerdos tienen como objetivo contener la inflación. Argentina cerró 2021 con un índice del 50,9%. Para 2022, el Banco Central estima una tasa de inflación del 55%. Inicialmente, en el proyecto de presupuesto para el nuevo ejercicio, el Gobierno proyectó que la tasa de inflación de este año sería del 33%, pero los legisladores de la oposición rechazaron la previsión por considerarla poco realista. Se prevé que la relación con el sector agropecuario siga siendo tensa, sobre todo después de que el gobierno prorrogara la prohibición de la venta de siete cortes de carne de vacuno en el extranjero hasta finales de 2023 y estableciera un marco regulatorio para la comercialización y exportación de ganado vacuno para los próximos dos años.

PIB, Inflación y Crecimiento Económico

Argentina, junto con Venezuela, presenta una de las tasas de inflación más altas de la región latinoamericana. Para 2021, el indicador alcanzó el 50,9% en el acumulado del año y dentro de la meta estipulada por el gobierno. Para 2022, el mercado proyecta una aceleración del 54,8% en los precios, pero el ministro de Economía, Martín Guzmán, esbozó una proyección donde el aumento sería del 33%. La alta inflación en Argentina tiene razones históricas, con una alta emisión monetaria ligada a una moneda en constante depreciación y tasas de interés por debajo del tipo de cambio, que se espera continúen en 2022.

En cuanto al crecimiento económico, Argentina presenta una de las mayores tasas de crecimiento en 2021. Se espera que el país acabe el año con un PIB un 9,8% superior al de 2020. Para 2022, sin embargo, la cifra debería ser del 2,2%, cercana a la media de la región. La reducción del crecimiento se produce precisamente por la aceleración de la recuperación en 2021 con una base comparativa baja para el año pasado. Se espera que a finales de año se normalice la situación de control de precios y cupos de exportación, fomentando el crecimiento económico del país. Es importante mencionar que el gobierno de Alberto Fernández tiene una línea mucho más moderada que la administración de la ex presidenta Cristina Kirchner, lo que podría facilitar la comunicación con algunos sectores económicos en torno a la agenda de recuperación económica.



Colombia

Elecciones Predisenciales

En Colombia no hay posibilidad de reelección, ni siquiera no consecutiva. Cada mandato presidencial dura cuatro años. El Presidente elegido gobernará el país entre 2022 y 2026. La primera ronda de votaciones tendrá lugar el 29 de mayo y la segunda vuelta el 19 de junio. Algunos de los principales precandidatos aún no están definidos, ya que las coaliciones de sus partidos aún realizarán consultas internas para elegir al candidato. Los actuales sondeos de opinión apuntan al favoritismo de Gustavo Petro, precandidato de izquierda de la coalición Pacto Histórico. Todavía no hay consenso sobre quién es el candidato con más posibilidades de oponerse a Petro en una eventual segunda vuelta, pero algunos de los principales candidatos son el ex ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga (Centro Democrático), del partido del actual presidente Iván Duque, y el independiente Rodolfo Hernández.

Las elecciones de 2022 indican una situación inédita en el país, con la posible victoria de la izquierda con Gustavo Petro. Colombia no ha sido controlada por un gobierno de izquierda desde la década de 1990, lo que la distingue de la mayoría de los países sudamericanos. Desde entonces, sólo los candidatos conservadores han ganado las elecciones presidenciales. Con el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), el uribismo se ha convertido en uno de los movimientos políticos dominantes en el país, ganando 4 de las últimas 5 elecciones presidenciales. La creciente impopularidad de este movimiento y del actual presidente Iván Duque, patrón político de Uribe, refuerza las dificultades de este campo ideológico para estas elecciones. La ausencia de unidad entre los candidatos conservadores y de centro también contribuye a esta perspectiva. Una convergencia entre los dos segmentos es poco probable, al menos antes de la segunda vuelta. La tendencia es que estos campos permanecerán fragmentados hasta las elecciones parlamentarias de marzo y, potencialmente, hasta la primera vuelta de las elecciones presidenciales de mayo. Aun así, cabe destacar que una gran parte del electorado todavía puede aglutinarse en torno a un nombre más de centro en comparación con Zuluaga (candidato uribista) o Petro.

En este sentido, a pesar de su ventaja en las encuestas y de las señales de fuerza de la izquierda en las últimas elecciones en América Latina, es probable que Petro se enfrente a una gran resistencia en una eventual segunda vuelta. El ex alcalde de Bogotá se enfrenta a altos índices de rechazo (44%, según recientes encuestas) por su pasada participación en la guerrilla del M-19 y el histórico conservadurismo del electorado colombiano. Petro también se enfrenta a cierta resistencia entre las alas minoritarias de la izquierda, aunque no la suficiente como para amenazar sustancialmente su llegada a la segunda vuelta de junio. Cabe destacar que el candidato es un político experimentado, que ocupa un puesto destacado en el Senado desde 2018 y que gobernó la capital del país, Bogotá,

entre 2010 y 2018. Además, ya ha hecho guiños a los liderazgos políticos tradicionales más conservadores y centristas en un intento de captar votos de estos segmentos, estrategia que debería mantener durante la campaña.

Elecciones Parlamentarias

Las elecciones legislativas elegirán a los parlamentarios que compondrán el Congreso del país entre 2022 y 2026. Tanto las elecciones al Senado como a la Cámara serán por representación proporcional y lista cerrada , y los mandatos durarán cuatro años.

- **SENADO:** 100 de los 108 escaños se asignarán con el resultado de la representación proporcional en una única circunscripción electoral; dos se reservarán para las poblaciones indígenas, un escaño para el segundo clasificado en la carrera presidencial y cinco se reservarán automáticamente para los Comunes (partido resultante del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC). Petro fue elegido senador tras perder la carrera en segunda vuelta contra Iván Duque en 2018.
- **CÁMARA DE REPRESENTANTES:** De los 188 escaños, 162 se asignarán con el resultado de la representación proporcional en los estados, dos se reservarán para las poblaciones afrocolombianas, uno para las poblaciones indígenas y uno para los colombianos que viven fuera del país. Se reservan 5 para los Comunes y 16 para las regiones especialmente afectadas por el conflicto civil que ha afectado al país. El último escaño está reservado para el segundo candidato a la vicepresidencia.

Se espera que las elecciones mantengan una distribución fragmentada de los partidos en la legislatura, en la que el Poder Ejecutivo tendrá que formar coaliciones para garantizar la gobernabilidad. Dada la historia conservadora de las elecciones en el país, es probable que la mayoría de los parlamentarios tiendan al centro. Por tanto, un eventual gobierno de izquierdas tendría dificultades para aprobar reformas significativas. Además, la coalición del "Pacto Histórico" apuesta por una estrategia de listas centrada en el candidato presidencial, lo que podría suponer una desventaja frente a candidatos fuertes del resto del espectro político. Aun así, cabe destacar que el descontento popular con el gobierno de Duque se refleja también con la desaprobación del desempeño del Congreso, lo que debería llevar a una renovación por encima de lo normal.

Las elecciones al Congreso serán también un punto de referencia para las elecciones presidenciales. Dado que se celebraron el 13 de marzo, más de dos meses antes de la primera vuelta de las elecciones

presidenciales, los resultados pueden influir en la formación de alianzas y en la percepción de la fuerza de los principales candidatos a la Presidencia.

Seguridad

En 2022 se cumplen 6 años de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto con las FARC. A pesar del fin oficial del conflicto, los problemas de seguridad y los conflictos relacionados con el narcotráfico siguen estando en la agenda política desde entonces. Se espera que el tema se plantee durante las elecciones presidenciales y parlamentarias y que siga afectando a la vida cotidiana de la población, especialmente en las zonas rurales. Cabe destacar que otros grupos guerrilleros activos (como el Ejército de Liberación Nacional) y los grupos de narcotraficantes siguen siendo significativamente activos en regiones más aisladas de los centros urbanos.

En cuanto a los Acuerdos de Paz de 2016, se espera que muchos de los candidatos conservadores que están considerando presentarse a las elecciones mantengan una posición crítica hacia el acuerdo y su implementación. El uribismo está en contra del acuerdo firmado, criticándolo como demasiado blando con los miembros de las Farc. El gobierno de Duque ha intentado modificar varias cláusulas durante su mandato. Una victoria de la izquierda o del centro en las elecciones presidenciales tendería a reforzar las disposiciones del documento y su implementación.

El narcotráfico también involucra la relación diplomática entre Venezuela y Colombia. El gobierno de Duque acusa al de Nicolás Maduro de proteger y financiar a los grupos armados colombianos para intentar desestabilizar el país. El diálogo con el país vecino será una de las prioridades del gobierno en 2022. Desde el punto de vista electoral, se espera que los lineamientos sobre cómo conducir la relación con Venezuela se integren al discurso de los principales candidatos. El actual gobierno colombiano ha reconocido a Juan Guaidó como presidente autoproclamado de Venezuela desde 2019, acusando al gobierno de Maduro de ilegítimo y dictatorial. La reapertura de la frontera terrestre por parte de Venezuela para el comercio a finales de 2021 es una señal positiva de acercamiento para 2022, pero un cambio significativo antes de la toma de posesión del nuevo presidente en agosto es poco probable.

Desde el punto de vista internacional, Estados Unidos puede seguir siendo un importante socio regional de Colombia. Teniendo en cuenta la política estadounidense de lucha contra el narcotráfico y la posición estratégica del país sudamericano como puerta de entrada a Centroamérica, Colombia debería seguir siendo un actor geopolítico estratégico e influyente. Además, cabe destacar que la

posición crítica hacia Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro también contribuyen al acercamiento con el régimen estadounidense, que tampoco reconoce al actual gobierno venezolano. Una victoria de Petro, que ya ha declarado su intención de volver a relacionarse con Venezuela, podría tensar la relación con EE. UU., pero es poco probable que acabe con los lazos entre los países a corto plazo.

Nuevo Paro Nacional

Es poco probable que se produzca una nueva ola de protestas como el "Paro Nacional" que tuvo lugar a principios de 2021. Se espera que el clima de insatisfacción popular con el gobierno continúe durante el mandato de Iván Duque, pero se manifestará principalmente a través del voto en las elecciones. De confirmarse los resultados de las encuestas, Colombia se sumará a otros países de la región que buscan implementar el "voto de protesta" contra los órdenes políticos de turno. Las dificultades derivadas de la pandemia y la crisis económica seguirán impactando a la población en 2022, pero en menor medida que en 2021. La percepción popular del empeoramiento de los indicadores económicos, como la inflación y el desempleo, tiende a ser contrarrestada por la recuperación económica de 2021, cuando el PIB del país creció por encima de la media del continente. Por lo tanto, no se espera que esto se refleje en grandes protestas. Vale la pena mencionar que el Paro Nacional surgió tras el descontento popular contra la reforma tributaria de Duque, que se traduciría en un aumento de los precios de los productos básicos. En un año electoral, los temas controvertidos tienden a quedar en segundo plano.

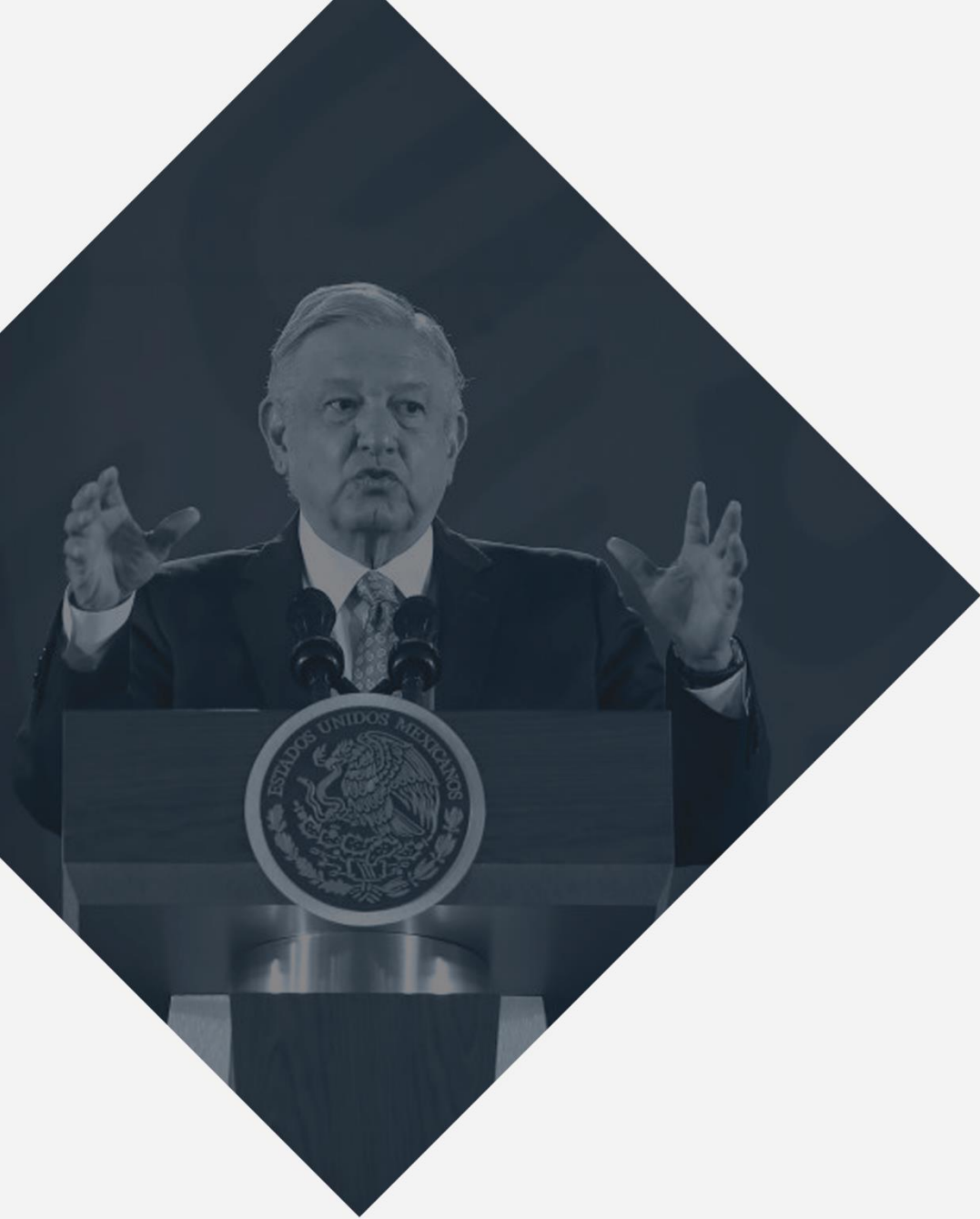
En la práctica, esto no significa que no se produzcan actos populares. Temas como la violencia urbana y rural, la desigualdad económica y el desacuerdo con algunas reformas económicas seguirán ocupando un lugar destacado, ya que requieren soluciones a largo plazo por parte del gobierno. Aspectos sistémicos de la economía del país, como la persistencia de altas tasas de desempleo, también mantendrán al gobierno en alerta ante las protestas, especialmente si la recuperación se ralentiza.

La toma de posesión de un nuevo jefe de Estado en la segunda mitad del año también tiende a frenar las grandes manifestaciones desde la toma de posesión hasta el final del año. Teniendo en cuenta que no es probable que se produzcan reformas amplias e impopulares poco después de la toma de posesión, es poco probable que una acción de gobierno provoque una nueva ola de actos. Además, se espera que el nuevo gobierno intente distanciarse de las medidas impopulares que lo paralizaron en un primer momento, como una reforma fiscal radical.

PIB, Inflación y Crecimiento Económico

Colombia mostró uno de los mayores crecimientos económicos de América Latina en 2021. Se espera que el país cierre 2021 con un aumento del PIB del 9,5%, mientras que la media de la región fue del 6,2%. En 2022, se espera que el crecimiento sea del 3,7%, menor que en 2021, pero todavía por encima de la media de la región (2,1%) y de Sudamérica (1,4%). La ralentización del crecimiento se produce a medida que disminuye el impulso de la inversión en el país el año pasado y mejoran las condiciones del mercado laboral. Además, se espera una consolidación fiscal a medio plazo para Colombia debido al plan de reforma fiscal aprobado en septiembre, junto con el restablecimiento de la regla fiscal tras una suspensión de dos años debido a la pandemia.

Sobre la inflación, hay que señalar que el país cerró 2021 con una aceleración del 5,62% en los precios. Para 2022, este indicador puede superar el 4%, el techo de la meta de inflación para el país. El precio de los alimentos fue el principal factor de 2021, afectando principalmente al segmento de la población con menores ingresos. La reciente devaluación de la moneda y el aumento del salario mínimo deberían tener un efecto importante en el indicador en 2022, y no se puede descartar una política monetaria más fuerte. Es importante destacar que el aumento de los precios de la canasta básica y de los sectores esenciales fueron los principales impulsores de las movilizaciones masivas a lo largo de 2021 en Colombia, manteniendo el riesgo inflacionario como uno de los principales impulsores de las manifestaciones sociales, especialmente durante el período electoral.



México

Reforma Energética

Una de las principales propuestas de campaña y de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la reforma energética es una de las principales agendas del gobierno mexicano para este año. La propuesta de AMLO establece que la empresa estatal de energía, Comisión Federal de Electricidad (CFE), tendrá el 54% del mercado de generación de energía en el país. A pesar de contar con el apoyo de 13 gobernadores y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la propuesta aún enfrenta resistencia en el Congreso. Entre enero y febrero, diputados y actores del sector eléctrico discutirán en 12 sesiones la propuesta de reforma eléctrica de AMLO. Los contratiempos son consecuencia de las elecciones intermedias de junio de 2021, cuando el partido del presidente López Obrador, Morena, perdió la mayoría absoluta en el Congreso. Aun con la alianza con otros partidos, como el PT y el Partido Verde, Morena sigue sin alcanzar la mayoría calificada (dos tercios) para aprobar las reformas constitucionales, lo que implica una negociación directa con los partidos de oposición, como Movimiento Ciudadano (MC), PRI y PAN. La previsión de la coalición de gobierno es completar la votación de la Reforma Energética para abril, un calendario muy ambicioso teniendo en cuenta las dificultades que rodean la agenda.

Otro de los grandes retos de la reforma energética de AMLO será superar las resistencias internacionales, sobre todo de Estados Unidos. Recientemente, el Comité de Finanzas del Senado estadounidense pidió a los representantes comerciales de ese país que se opongan con más fuerza a la reforma. Según los legisladores, la propuesta de AMLO viola los acuerdos alcanzados por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en los sectores energético, laboral, agrícola y económico. El embrollo cobró fuerza después de que el gobierno mexicano suspendiera la autorización de importación de más de 80 empresas estadounidenses sobre Pemex, la petrolera mexicana, y la CFE. Otro gran reto para la empresa estatal de energía será mantener el ritmo de producción de energía más limpia y de menor coste implementado por la última reforma en 2013, lo que perjudicará las posibilidades del país de alcanzar sus objetivos sostenibles. Además, existe la preocupación de que los generadores privados encuentren obstáculos para vender energía directamente a los grandes consumidores. Para el gobierno, la propuesta es prioritaria, pero su avance podría significar una mayor cautela para las inversiones extranjeras y privadas en el país, lo que podría perjudicar el crecimiento económico del país y el retorno a los índices socioeconómicos previos a la pandemia. Si la propuesta no prospera, la tendencia es que López Obrador intensifique sus ataques a otras instituciones con el pretexto de que el asunto es de interés popular.

Revocación de Mandato

La revocación de mandato también es una agenda prioritaria para AMLO en 2022. El presidente pretende convocar una nueva consulta popular para que los votantes elijan si el presidente seguirá o no en el cargo durante los próximos tres años. AMLO también aboga por que esta práctica sea prohibida por los futuros gobernantes. Sin embargo, la propuesta sigue siendo resistida, principalmente por el Instituto Nacional Electoral (INE), que asegura que no hay presupuesto para realizar una nueva consulta popular en 2022. Las declaraciones del INE han abierto una línea conflictiva entre los poderes Ejecutivo y Electoral, con ataques diarios de López Obrador y sus aliados al organismo autónomo. La propuesta del gobierno es realizar la consulta en abril. Hay algunos puntos necesarios a considerar al analizar este riesgo. El primero es que si AMLO no realiza la consulta, la tendencia es a una postura mucho más agresiva entre los otros poderes, lo que podría aumentar los riesgos para la estabilidad política y los niveles de polarización en el país, elevando la desconfianza sobre las instituciones independientes del país. El segundo punto es que López Obrador sigue siendo un político extremadamente popular. Las últimas encuestas de opinión indican que tiene los índices más altos de la región, con un 60% de promedio de aprobación popular. Esto implica que el proceso de destitución tendría un carácter meramente simbólico. El gobierno es consciente de sus índices de popularidad y de que la consulta no conduciría a un resultado contrario a sus expectativas.

La convocatoria popular podría implicar, como consecuencia, una oportunidad para más guiños y discursos incisivos de AMLO, dañando la estabilidad de las instituciones democráticas y la relación entre los otros poderes del Estado, ya que la destitución serviría como instrumento político para intensificar los conflictos entre los otros actores. El escenario pone de manifiesto un peligro inminente de riesgos en la región, como los signos de fragilidad democrática, los desafíos en materia de gobernabilidad y la creciente concentración de poder entre líderes populistas con sesgos autoritarios. El escenario podría ser aún más intenso si la bancada gobernante en el Congreso impulsa la revocación del mandato, su éxito o fracaso, como una oportunidad para la reforma electoral de AMLO, lo que, entre otros puntos, facilitaría la destitución de los miembros del Consejo Electoral y del Tribunal Electoral y dificultaría la autonomía de la institución.

Otro punto relevante es que, además de su carácter puramente político, la revocación de mandato implicaría gastos no contemplados en el presupuesto actual que se le otorga al INE, producto de un recorte hecho por el propio gobierno. Además, si el órgano electoral cuenta con los recursos suficientes para implementar la propuesta de AMLO, aún existe el riesgo de no tener resultados concretos. En la última consulta popular impulsada por el gobierno, que buscaba realizar la evaluación

política de los ex presidentes, el INE registró sólo 8% de participación. Para que una consulta se considere válida, debe participar el 40% de los ciudadanos aptos, alrededor de 37 millones de mexicanos en la actualidad. Con la caída de la presencia de Morena en distritos importantes, aún es poco probable que la base gobernante pueda movilizar este contingente en el corto plazo.

Proyectos de Infraestructura

El gobierno federal tiene tres proyectos prioritarios para 2022: el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. A finales de diciembre de 2021, López Obrador emitió un nuevo decreto para transformar la agenda de infraestructura de su gobierno -energética, ambiental, portuaria, aeroportuaria, hidráulica, sanitaria, entre otras- en un asunto de seguridad nacional e interés público. El gobierno pretende evitar cualquier embargo legal en la agenda prioritaria y agilizar los trámites burocráticos, como la facilitación de licencias y autorizaciones en un máximo de cinco días hábiles. Además, el gobierno mexicano ha optado por aumentar la participación militar a través de la Secretaría de la Defensa Nacional en las obras civiles, dando más poder y autonomía al Ejército, lo que las organizaciones han criticado. Algunas organizaciones indígenas también han cuestionado la agenda de prioridades del gobierno, alegando que los megaproyectos lesionan la autonomía de las comunidades. Sin embargo, no se espera que la propuesta del Tren Maya esté terminada hasta 2023. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), principal organismo para los proyectos de infraestructura, contará con un presupuesto de más de 3.000 millones de dólares para proyectos ferroviarios, carreteros y aéreos, manteniéndose como una de las agendas prioritarias para el gobierno a lo largo de 2022.

Uno de los grandes retos de este sector es una condición histórica. La infraestructura aún tiene dificultades para mantener una característica y visión de largo plazo, que minimice las rupturas excesivas en los diferentes sexenios. Históricamente, las diferentes administraciones federales han apostado por una agenda más segmentada que muchas veces cumple con sus propios intereses políticos y necesidades temporales. La presión no es exclusiva del gobierno de López Obrador, pero resalta cierta urgencia por pensar en proyectos y programas de infraestructura de largo plazo que impliquen un desarrollo económico y social capaz de sobrevivir a diferentes administraciones y sexenios.

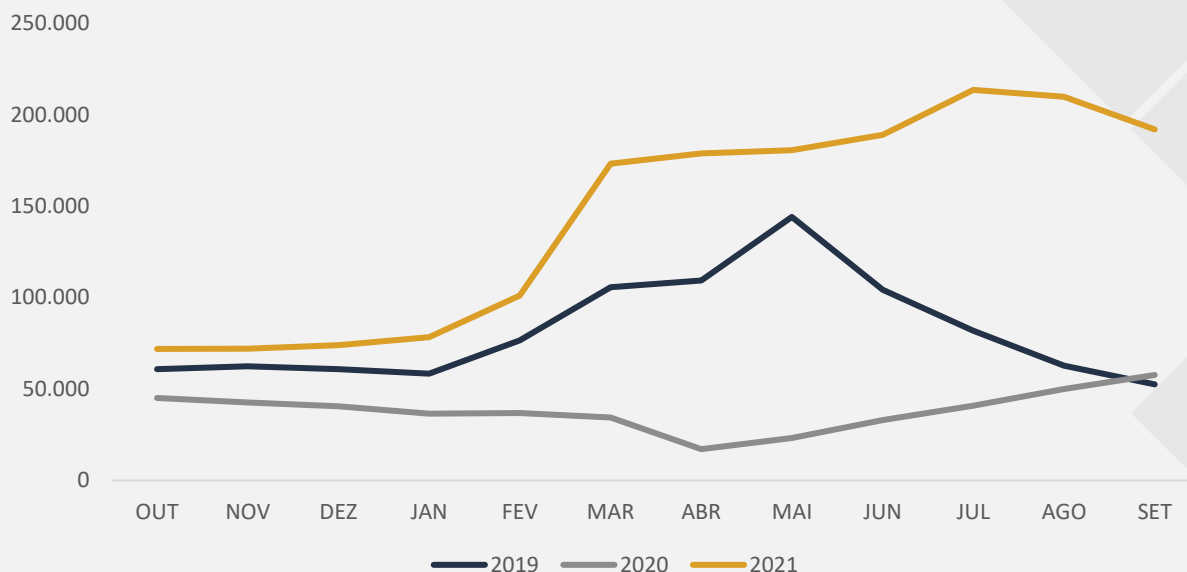
Migración

Se prevé que la crisis migratoria en México siga siendo uno de los principales vectores de la política exterior del país, además de la pandemia del coronavirus. Desde que la administración de Joe Biden retomó una serie de protocolos de la política antimigratoria de Donald Trump, Permanezcan en México, el gobierno mexicano ha sido acusado por Estados Unidos de realizar acciones más concretas para contener la migración, dado que México es considerado un país de tránsito. Una de las reformas implementadas por Biden es permitir que los inmigrantes reciban asistencia legal más rápida mientras esperan sus solicitudes de asilo. Mientras tanto, el gobierno mexicano continuará presionando a Washington para lograr una cooperación mutua que mejore las condiciones en la frontera sur, en temas como la construcción de albergues, el acceso a Internet y la mejora de la aplicación de la ley y la seguridad. Sin embargo, es importante considerar que existe un esfuerzo por parte de la nueva administración para poner fin a la política de Trump, que sólo se reanudó tras una decisión judicial. La Casa Blanca ha presentado una solicitud a la Corte de Estados Unidos para que aclare si el gobierno estará obligado a mantener el programa. La presión viene de estados que ven la migración con más preocupación, como Texas y Missouri. Antes de que se reintrodujera el programa, los inmigrantes que solicitaban asilo tras cruzar la frontera entre México y Estados Unidos podían esperar el veredicto en suelo estadounidense. La Corte Suprema tiene actualmente una mayoría conservadora, lo que podría significar dificultades para que el gobierno de Biden revierta algunas de las políticas antiinmigración de Donald Trump.

El tema también es considerado una preocupación para el gobierno mexicano, ya que una de las principales propuestas del presidente López Obrador fue disminuir el flujo migratorio a través de las fronteras, lo cual no resultó factible el año pasado, cuando el flujo de inmigrantes superó los récords de 2019 y 2020. En 2019, el Departamento de Seguridad Nacional detuvo a más de **977.000** inmigrantes en la frontera con México. En 2020 la cifra bajó a **458.000**, pero en 2021 se detuvo a más de **1,7 millones** de personas en la frontera. La búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas es una de las principales causas de la inmigración, un escenario potenciado por los impactos de la pandemia.

Inmigrantes detenidos en la frontera con México

Fuente: U.S. Customs and Border Protection, 2022.



Con una política exterior mucho más orientada a Centroamérica, México ha estado presionando a Estados Unidos para que, además de las inversiones de contrapartida en seguridad y mejoras fronterizas, Washington apoye y financie otros programas socioeconómicos para los países centroamericanos. Estados Unidos y México anunciaron recientemente un programa similar, Sembrando Oportunidades, que proporcionará becas y escolarización a jóvenes de Honduras, El Salvador y Guatemala. El proyecto es similar a la política nacional de López Obrador, Sembrando Vida, que busca fomentar la conservación del medio ambiente y estimular proyectos agroforestales en las zonas más vulnerables del país. Los beneficiarios de Sembrando Vida reciben una cantidad mensual de 5.000 MXN para realizar trabajos en sus respectivas tierras con un enfoque de sostenibilidad y desarrollo regional a corto, medio y largo plazo. El proyecto Sembrando Oportunidades también deberá priorizar las actividades agrícolas y será impulsado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional (Amexcid) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los montos de inversión de cada país aún no han sido revelados, así como el inicio del programa. El acuerdo es una buena noticia para México, principalmente porque Estados Unidos aún se resistía a lo que sería la mejor metodología para frenar las olas migratorias en la región. Históricamente, Estados Unidos tampoco ha ofrecido un desembolso directo para políticas de esta envergadura. En un camino de ida y vuelta, la reducción de los flujos migratorios podría beneficiar los índices de popularidad de ambas administraciones, pero principalmente de Joe Biden, quien ha enfrentado una reducción en sus índices de aprobación en los últimos meses.

PIB, Inflación y Crecimiento Económico

Se espera que la inflación mexicana se mantenga por encima del objetivo de inflación del 3% en 2022, tras cerrar 2021 en el 7,36%, el nivel más alto en más de 20 años. Según el Banco de México, se espera que la inflación alcance el 6,7% en el primer semestre, pero que cierre el año en el 3,5%. A pesar de que la cifra es menor que en 2021, la presión por la crisis en la cadena productiva y las incertidumbres por el avance de la variante omicrónica siguen afectando las expectativas del mercado sobre la economía.

En consecuencia, se espera que el crecimiento económico también se desacelere en 2022. Según el informe de la CEPAL (2022), se espera que México crezca un 5,8% en 2021. Para 2022, la previsión es del 2,9%. La reducción se debe a la subida de los tipos de interés del país para combatir la inflación y a la ralentización de la recuperación que se produjo en el tercer trimestre (y que se espera en el cuarto) de 2021. Aunque el crecimiento del 2,9% es bajo si se compara con el de 2021, la base comparativa de 2021 también era baja. Además, el crecimiento está por encima de la media de la región para 2022. Cabe señalar que estas expectativas pueden verse alteradas si se produce una desaceleración de la variante omicrónica y la consiguiente reducción de las preocupaciones externas sobre la recuperación del país. Hasta ahora, el gobierno federal ha descartado nuevas restricciones para hacer frente a la nueva ola de la pandemia que podría afectar al crecimiento económico del país. Las restricciones en el sector comercial y turístico podrían acelerar aún más este riesgo. Asimismo, las nuevas restricciones en la frontera norte con Estados Unidos preocupan al gobierno mexicano en su agenda de recuperación económica. El mercado también estará atento a los intentos del gobierno federal de negociar la reforma eléctrica en el país, que pretende priorizar el poder estatal sobre la producción y distribución de energía, manteniendo cierto temor sobre la estabilidad económica y, en consecuencia, estancando las inversiones extranjeras y privadas.



Diagramación y Corrección de Texto

Débora Silva
Laura Naves
Marcelo Breder
Marina Torres

Elaboración

Bernardo Nigri
Cicília Prado
Débora Jacinto
Eduardo Martins
Isabel Lopez
Larissa Sena
Letícia Neves
Luiz Eduardo
Nicholas Borges

Coordinación de Análisis Político

Lucas Fernandes

Gestión de Productos y Proyectos

Andressa Canela

CEO

Wagner Parente

www.bmj.com.br